

Artículo de Investigación

45 años de destrucción (reconversión) industrial de España: consecuencias en la estructura social del régimen del 78

45 years of destruction (reconversion) of Spain's industry: consequences on the social structure of the 1978 regime

Rubén Tamboleo García: Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Carlos III de Madrid, España.

ruben.tamboleo@uam.es

Fecha de Recepción: 14/12/2025

Fecha de Aceptación: 16/01/2026

Fecha de Publicación: 22/01/2026

Cómo citar el artículo

Tamboleo García, R. (2026). 45 años de destrucción (reconversión) industrial de España: consecuencias en la estructura social del régimen del 78 [45 years of destruction (reconversion) of Spain's industry: consequences on the social structure of the 1978 regime]. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 01-26. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-2695>

Resumen

Introducción: Analiza la desindustrialización española (1980-2024), argumentando que la mal llamada “reconversión” fue un desmantelamiento sistemático. El objetivo es evidenciar cómo este proceso, impulsado por la integración en la CEE/UE transformó negativamente la estructura social del régimen del 78. Se sostiene que la pérdida de empleo industrial de calidad no se compensó con el sector servicios, sino que generó precariedad masiva. **Metodología:** La investigación emplea un enfoque mixto. Cuantitativamente, se utiliza la estadística oficial (INE) para medir la caída del empleo y el VAB industrial, así como la evolución salarial.

Resultados: Se verifica una drástica caída del empleo industrial. Esta pérdida consolidó una economía terciarizada, con una alta proporción de trabajos temporales y de menor valor añadido, generando una brecha de precariedad. Territorialmente, acentuó la dualidad y el vaciamiento en regiones como Asturias o Galicia, mientras debilitaba la capacidad recaudatoria del Estado del Bienestar. **Discusión:** La pérdida de soberanía industrial ha generado una dependencia estructural. La discusión central se enfoca en cómo la erosión de la base productiva ha impactado directamente en la cohesión social, y la sostenibilidad del

sistema público. **Conclusiones:** La desindustrialización ha sido un proceso político-social con consecuencias estructurales como la precarización laboral y aumento de la desigualdad territorial.

Palabras clave: Sociología; globalización; inmigración; marxismo; estratificación; legitimación; Psicología Social; Unión Europea.

Abstract

Introduction: This article analyzes Spanish deindustrialization (1980–2024), arguing that the so-called “reconversion” was, in fact, a systematic dismantling. The aim is to highlight how this process, driven by integration into the EEC/EU negatively transformed the social structure of the 1978 regime. It is maintained that the loss of quality industrial jobs was not offset by the service sector but instead generated widespread precarity. **Methodology:** The research employs a mixed-methods approach. Quantitatively, official statistics (INE) are used to measure the decline in employment and industrial GVA, as well as wage trends. **Results:** A drastic drop in industrial employment is verified. This loss consolidated a tertiarized economy, with a high proportion of temporary, lower value-added jobs, creating a precarity gap. Territorially, it exacerbated duality and economic hollowing out in regions like Asturias or Galicia, while weakening the welfare state's contribution base. **Discussion:** The loss of industrial sovereignty has led to structural dependency. The central discussion focuses on how the erosion of the productive base has directly impacted social cohesion, inequality, and the sustainability of public system. **Conclusions:** Deindustrialization has been a political-social process. Its structural consequences, including job precarity and deepen territorial inequality.

Keywords: Sociology; globalization; immigration; Marxism; stratification; legitimization; Social Psychology; European Union.

1. Introducción

Contar la historia industrial de España desde los años ochenta hasta hoy exige ir más allá de las cifras. Lo vamos a hacer desde una perspectiva sociológica de estratificación. El país vivió un proceso que no fue una simple modernización técnica, sino una transformación que afectó a la estructura social, a la organización del trabajo y al modo en que muchas regiones entendían su propio lugar en el país. La reconversión, tal como se llamó entonces, se presentó como un ajuste necesario para adaptarse a Europa. En la práctica, significó el cierre progresivo de sectores que habían sostenido durante décadas empleo estable, identidades colectivas y una forma particular de cohesión territorial.

La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 abrió oportunidades (los análisis habituales sólo se centran en eso), pero también marcó los límites de lo que España podía proteger. Las normativas de competencia, las restricciones a las ayudas estatales y la liberalización comercial hicieron que industrias debilitadas –por falta de inversión, por tecnología rezagada o por presiones internacionales– acabaran sin margen para resistir. Se trató de una adaptación acelerada a un entorno económico que favorecía a países con tradición industrial más sólida y con mayor capacidad para orientar inversión hacia sectores estratégicos.

España hizo ese tránsito en paralelo a otro proceso: la consolidación del régimen nacido en 1978. El país quería homologarse a Europa, mejorar su competitividad y dejar atrás la imagen de atraso. Sin embargo, ese camino tuvo un coste: la desaparición de miles de empleos manufactureros que no solo sostenían salarios, sino también estructuras familiares, redes sindicales y formas de vida comunitarias.

El crecimiento posterior del sector servicios compensó en número, pero no en calidad. La temporalidad, los salarios más bajos y la menor capacidad contributiva se convirtieron en rasgos persistentes.

Esta transformación tuvo consecuencias visibles. Las regiones del norte y del noroeste, donde la industria era el eje económico, vivieron un declive que afectó a su demografía, sus expectativas y su capacidad para retener a los jóvenes. En zonas mediterráneas, la expansión del turismo y de los servicios actuó como sustituto, aunque con empleos más frágiles. A nivel estatal, la reducción del peso industrial debilitó la base productiva que sostenía las cotizaciones y la financiación del Estado del bienestar.

La sociología clásica y la perspectiva materialista permiten leer este proceso con claridad: cuando cambia la estructura productiva, cambia también la estructura social. No se trata solo de dónde se trabaja, sino de cómo se organiza el poder, qué trayectorias laborales son posibles y qué capacidad tiene un país para sostener protección social en el largo plazo. Las sucesivas reformas europeas —desde el mercado único hasta el euro— reforzaron normas y controles, pero redujeron el margen para políticas industriales propias. Esa tensión entre un Estado muy regulado y poco autónomo en lo productivo es uno de los hilos que recorre las últimas cuatro décadas.

En conjunto, entender la desindustrialización española significa observar cómo decisiones políticas, dinámicas internacionales y transformaciones económicas fueron reconfigurando territorios, clases sociales y expectativas colectivas. No es solo una historia de fábricas que cierran; es la explicación de por qué hoy existe un país más desigual entre regiones, más dependiente del turismo y más vulnerable ante los ciclos económicos globales.

1.1. La Reversión Industrial de España desde una perspectiva materialista

La reconversión industrial no afectó por igual a todo el país. Asturias, País Vasco, Galicia o la Bahía de Cádiz vivieron cierres que alteraron de manera profunda la vida cotidiana. La desaparición de astilleros, siderurgias o explotaciones mineras no solo dejó miles de desempleados: rompió identidades construidas durante generaciones, debilitó sindicatos que habían sido muy fuertes y abrió un periodo de incertidumbre que todavía se nota en el tejido social de estas regiones.

Mientras esto ocurría en el norte y noroeste, regiones mediterráneas vivieron un proceso muy distinto. Allí creció el empleo relacionado con construcción, turismo y servicios de baja productividad. Este contraste territorial configuró un mapa desigual: zonas que pasaron de empleos industriales estables a trabajos temporales, y otras que crecieron en actividades más expuestas a estacionalidad y salarios más bajos, como se encuentra en algunos estudios de caso (Luna Cano, García Luque y Hernández Pedreño, 2022).

Desde una lectura materialista, estos cambios no son meras variaciones económicas. Marx señalaba que el modo de producción determina buena parte de la organización social. Cuando la industria retrocede, la clase trabajadora pierde un tipo de empleo que ofrecía estabilidad, posibilidades de ascenso y un tejido colectivo fuerte. La expansión del sector servicios, con menor productividad y salarios más reducidos, fractura esas trayectorias y debilita la capacidad de sostener una base contributiva sólida. Esto tiene efectos directos: menor cohesión, más desigualdad y menor capacidad para sostener el Estado del bienestar.

1.2. *El análisis histórico y sus consecuencias sociales*

El análisis histórico muestra una secuencia de hitos que explican el ritmo y la intensidad del proceso. La entrada en la CEE en 1986 supuso abrir fronteras a industrias mucho más competitivas, al tiempo que se eliminaban ayudas estatales a sectores como la siderurgia o el naval. La modernización prometida se tradujo, en muchos casos, en cierres y reducciones masivas de plantilla.

La década de 1990 profundizó esta tendencia con los criterios de Maastricht. España debía contener el déficit, reducir deuda y acomodar su economía a un futuro con moneda única. La inversión pública industrial se redujo y se priorizó la estabilidad macroeconómica frente a una política de desarrollo productivo. Con la llegada del euro en 2002, la política monetaria dejó de responder al contexto nacional. La inversión se desplazó hacia sectores de retorno rápido, especialmente la construcción.

La crisis financiera de 2008 cerró el círculo. La industria española, ya debilitada, sufrió otra caída brusca. El país recuperó parte del empleo perdido, pero sobre todo en sectores de baja productividad, reforzando un modelo económico que genera trabajo, pero no necesariamente estabilidad ni aportaciones elevadas al sistema.

Cuando se compara esta evolución con otros países europeos, la diferencia es clara. Alemania, Austria o incluso Francia conservaron núcleos industriales fuertes gracias a políticas activas. Países del Este construyeron industrias modernas apoyándose en fondos europeos. España, en cambio, afrontó el proceso con menos instrumentos y con un Estado limitado por las reglas comunitarias: claro ejemplo es la Política Agraria Común (propiamente del sector primario) que nos ha hecho mucho daño. Aquí nos centramos más en el sector secundario, pero cabe mencionar la relación clara que observamos en la dinámica. Otras herramientas comunitarias que decían ayudar han profundizado en la dependencia y en la dinámica regresiva de la industria española.

Las consecuencias sociales son visibles: regiones que pierden industria pierden población joven, envejecen y ven reducirse su capacidad de financiar servicios públicos. Los empleos que sustituyen a los antiguos puestos industriales no generan las mismas condiciones de vida, ni la misma estabilidad, ni las mismas posibilidades de planificación familiar o vital. La precariedad deja huella en la estructura social.

La desindustrialización española, por tanto, no fue un fenómeno inevitable ni estrictamente económico. Fue la combinación de decisiones políticas, presiones internacionales y un modelo de integración europea que protegió poco a sectores estratégicos. Las consecuencias siguen hoy abiertas: desigualdad territorial (Hernández Pedreño y Manzanera Román, 2026), fragilidad laboral y una base material más débil para sostener el Estado del bienestar.

2. **Objetivo e hipótesis**

El presente trabajo se plantea con el objetivo fundamental de reinterpretar críticamente el proceso de desindustrialización de España ocurrido a lo largo de 45 años (1980-2025), moviéndose más allá de la etiqueta oficial de “reconversión industrial” para analizarlo como un fenómeno de destrucción sistemática y estructural.

Nuestro propósito es hacer un marco general de lo aquí ocurrido con este proceso frente a la propaganda del sistema supranacional. Buscamos demostrar que la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) actuaron como catalizadores que desmantelaron una base productiva sólida, dejando a cambio una economía de servicios incapaz de sostener la calidad del empleo y la protección social anterior, adhesión que por lo tanto ha tenido un muy elevado coste cuantitativo y cualitativo para España y su pueblo.

Para ello, formulamos la hipótesis central de que la pérdida masiva de empleo industrial – estable, bien remunerado y con altas cotizaciones – no fue compensada por la creación de empleo en el sector terciario en cuanto a la calidad de vida y la cantidad de la contribución al sistema público. En su lugar, esta transición generó una terciarización de baja calidad caracterizada por la precariedad laboral, la alta temporalidad y la disminución del valor añadido.

Esta sustitución ha tenido un doble efecto negativo: por un lado, ha precarizado a la clase trabajadora y ha aumentado la desigualdad social; por el otro, ha debilitado la base contributiva de la Seguridad Social, poniendo en riesgo la financiación de las pensiones y los servicios públicos. En esencia, postulamos que la destrucción industrial es la raíz material de las tensiones sociales y las fragilidades económicas que actualmente enfrenta el modelo de convivencia español, haciendo de su análisis un imperativo para comprender la realidad socioeconómica contemporánea del país.

3. Marco Teórico

Comprender la desindustrialización española requiere un marco que no se limite a describir curvas de empleo o porcentajes del PIB. El proceso afecta a las relaciones sociales, a la distribución de poder entre clases, a la cohesión territorial y al propio papel del Estado dentro de la Unión Europea. Para explicarlo de manera coherente, este marco teórico combina tres miradas que dialogan entre sí: la tradición materialista que pone el foco en la economía política del trabajo; las aportaciones de la sociología clásica y contemporánea que analizan instituciones, cultura y experiencia obrera; y la sociología política europea, imprescindible para entender cómo la integración comunitaria condicionó la autonomía industrial del país. Estas tres perspectivas permiten situar la desindustrialización no como un fenómeno técnico, sino como una transformación social que ha alterado la estructura productiva (Ortín, 2026) y las expectativas vitales de varias generaciones.

3.1. De la retórica de la “reconversión” a la realidad de la destrucción industrial

El discurso oficial de los años ochenta habló de “reconversión”, una palabra que parecía indicar un proceso de adaptación ordenada hacia un modelo industrial más moderno. La realidad fue mucho más dura. El cierre de astilleros, siderurgias y explotaciones mineras marcó a regiones enteras y tuvo consecuencias que no encajan en el relato amable de la modernización. En Asturias, Galicia, País Vasco o Cádiz, lo que sucedió no fue una transición, sino la ruptura de un orden social construido alrededor de la industria pesada.

La narrativa institucional sirvió para suavizar el impacto político de estas decisiones. Presentar los cierres como una “racionalización” escondía el desmantelamiento de sectores enteros y la pérdida de empleos que habían sido el núcleo de la clase trabajadora española. Las nuevas reglas comunitarias, las restricciones a las ayudas estatales y la apertura del mercado interior europeo consolidaron una dependencia exterior que limitó la capacidad del país para sostener su propio tejido productivo.

En el fondo, la “reconversión” fue el nombre diplomático de un proceso que redujo la autonomía industrial española y dejó a muchas regiones con alternativas laborales menos estables y peor remuneradas.

3.2. Perspectiva materialista: estructura económica y cambio social

La lectura materialista resulta especialmente útil para entender la profundidad del cambio. Marx planteaba que las relaciones de producción y la estructura económica condicionan la posición de las clases y la distribución del poder. A medida que la industria perdió peso y se expandieron los servicios de bajo valor añadido, se modificó la composición social de la clase trabajadora.

Los empleos industriales ofrecían salarios superiores a la media, estabilidad, convenios fuertes y posibilidades de ascenso. Su caída no fue solo un cambio en la estructura del empleo, sino una pérdida de movilidad social para millones de trabajadores. La fuerza productiva del país se desplazó hacia sectores donde la rotación laboral es elevada y donde la aportación fiscal por empleo es mucho menor.

El resultado fue una fragmentación de la clase trabajadora: por un lado, los empleos industriales cualificados que sobreviven; por otro, un creciente conjunto de trabajos precarios que sostienen menos al sistema de bienestar. Esta fragmentación explica buena parte de la desigualdad actual.

3.3. Aportaciones de la sociología clásica y contemporánea

La sociología clásica ofrece herramientas para entender cómo la pérdida industrial transforma la vida cotidiana. Weber insistía en la importancia de las instituciones y la burocracia en la organización económica, mostrando que las decisiones sobre normas, controles y competencias pueden fortalecer o debilitar sectores enteros. La regulación europea, cada vez más extensa, reorganizó el margen de actuación del Estado español, reforzando su papel normativo pero reduciendo su capacidad de intervención productiva.

Polanyi interpretó la liberalización como un proceso que, si no se acompaña de protección social, desestabiliza a las comunidades. Su idea del “doble movimiento” ayuda a entender cómo la apertura europea dejó sin herramientas a los territorios que perdían empleo industrial, erosionando la cohesión social. Thompson aporta otra clave: la cultura del trabajo. La desaparición del empleo obrero no es solo un ajuste económico, sino la pérdida de tradiciones, solidaridades y formas de vida que habían dado identidad a comarcas enteras. Wright completa el cuadro mostrando cómo la reconfiguración del empleo genera nuevas jerarquías dentro de la clase trabajadora, con segmentos precarizados que no encuentran una posición estable en el sistema económico.

3.4. Sociología política europea y española

La integración de España en la Unión Europea introdujo un nuevo tipo de intervención estatal. Contrariamente a la idea de liberalización, España se convirtió en un Estado más intervenido normativamente, obligado a cumplir regulaciones estrictas en medio ambiente, energía, agricultura y competencia, pero con menor capacidad de proteger su industria y empleo (Polanyi, 1944; Weber, 1978). Este tipo de intervención regulatoria tiene efectos paradójicos: por un lado, fortalece el control sobre mercados y recursos; por otro, limita la autonomía de políticas industriales estratégicas que podrían sostener empleo de calidad.

La sociología política permite analizar cómo estas restricciones externas transforman la estructura social, generan desigualdad territorial y afectan la capacidad del Estado para mantener su modelo de bienestar, sobre todo en las regiones industriales más afectadas.

3.5. Integración europea y dependencia estructural

La entrada en la CEE en 1986 y la adopción del euro en 2002 condicionaron profundamente la política industrial y fiscal de España. La apertura de mercados europeos, combinada con la prohibición de ayudas estatales a sectores estratégicos, generó una competencia desigual y aumentó la vulnerabilidad de la industria nacional (Thompson, 1963). La dependencia estructural se manifiesta en la necesidad de inversiones extranjeras, importaciones industriales y decisiones de empresas multinacionales para sostener sectores productivos.

Ejemplos claros incluyen los astilleros de Galicia y Cádiz, la siderurgia del País Vasco y Asturias, y la minería en León y Teruel. Esta dependencia explica por qué España, a diferencia de Alemania o Austria, no pudo mantener una base industrial fuerte capaz de sostener empleo estable y contribuir de manera robusta al Estado del bienestar.

3.6. Consecuencias sociales y laborales

La pérdida de empleo industrial de calidad tiene implicaciones directas sobre la estructura social y el Estado del bienestar. El empleo industrial ofrece salarios superiores, estabilidad y cotizaciones consistentes; su sustitución por empleos de baja productividad en el sector servicios genera precariedad, temporalidad y menor contribución al sistema de protección social (Wright, 1997). Conceptos como empleo de baja productividad se refieren a trabajos que generan menos valor añadido, remuneración inferior y menores aportaciones fiscales. Trabajo precario describe ocupaciones con temporalidad, inestabilidad y escasa seguridad social. La expansión de este tipo de empleo ha consolidado desigualdad territorial y social en España, especialmente en regiones terciarizadas, y ha creado tensiones estructurales que limitan la eficacia del Estado del bienestar frente a países europeos con bases industriales sólidas.

Por todo esto que estábamos hablando, la sociología materialista y clásica desde la Escuela Marxista y ofrece un marco comprensivo para interpretar la desindustrialización española. Combina análisis de condiciones materiales, estructura de clases, cultura laboral y restricciones institucionales. Permite entender que la “reconversión” no fue un proceso neutro, sino un desmantelamiento industrial con consecuencias sociales duraderas, generando dependencia europea y tensiones sobre el Estado del bienestar que aún persisten.

4. Metodología

La investigación que sustenta este artículo se centra en la desindustrialización española desde 1980 hasta la actualidad (recordemos especialmente que hemos dicho 45 años aunque de los últimos 2 es muy difícil tener datos cerrados coherentes y con impacto y las tendencias pueden cambiar, por lo que tenemos en cuenta esta limitación). Su objetivo principal es comprender cómo la transformación industrial ha afectado la estructura social, el empleo y la cohesión territorial, considerando además el papel de la integración europea y las políticas económicas nacionales.

Para ello, se ha optado por un enfoque basado en fuentes secundarias, entendidas como estadísticas oficiales, informes institucionales, literatura académica y estudios históricos, combinadas de forma crítica para reconstruir tendencias y establecer relaciones causales plausibles (Bañón Martínez y Tamboleo García, 2015).

Este enfoque no se limita a recopilar datos, sino que busca integrarlos con análisis cualitativos para ofrecer una visión más completa del proceso de destrucción (reconversión) industrial.

Se han utilizado indicadores de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y el Banco de España. Estos datos incluyen información sobre empleo industrial y en el sector servicios, PIB industrial, productividad, salarios y cotizaciones. Su análisis permite medir de manera objetiva los impactos de la desindustrialización sobre la economía y el Estado del bienestar. Además, se consultaron informes de la Unión Europea y documentación sobre políticas comunitarias que afectan a la industria española.

La combinación de estas fuentes ofrece una doble perspectiva: cuantifica los cambios a nivel nacional y permite analizar cómo varían entre regiones, mostrando la heterogeneidad del proceso. Se seleccionaron casos representativos para ilustrar el impacto territorial de la desindustrialización. Astilleros en Galicia y Cádiz, siderurgia en País Vasco y Asturias, y minería en León permiten observar cómo las políticas económicas y europeas afectaron directamente el tejido productivo y social. La elección se basa en la relevancia histórica, la magnitud del empleo afectado y la disponibilidad de datos confiables, buscando que estos casos sirvan como microcosmos del fenómeno nacional.

5. Resultados

Los números suelen contar historias aburridas si se leen sin contexto, pero cuando los articulamos con los giros que ha vivido España desde los años ochenta, dejan ver un relato bastante más áspero. En estas páginas reunimos los datos más sólidos que existen sobre el retroceso industrial y los cruzamos con varios hitos políticos –entrada en la CEE, convergencia hacia Maastricht, euro, liberalización comercial y la sacudida de 2008– para hacer visible qué cambió, cuándo, cómo y dónde golpeó con más fuerza.

Y, sobre todo, qué significó para la estructura social española: salarios, estabilidad, formas de vida, territorios completos que perdieron su función económica. No hablamos aquí de sensaciones ni de prejuicios ideológicos, sino de lo que dicen INE, IVIE, Eurostat y Banco de España cuando se miran números de largo plazo.

Una manera sencilla de empezar esta historia es atender al peso de la industria en el empleo y en el valor añadido. No porque sean los únicos indicadores posibles, sino porque resumen bien la magnitud de un proceso que ha ido vaciando a España de empleos manufactureros mientras dejaba crecer el sector servicios. En el año 2000, según los datos del IVIE, el empleo manufacturero representaba en torno al 17 % de toda la ocupación. Veinticuatro años después, en 2024, ese porcentaje cae al 9,9 %.

Es casi una reducción a la mitad. En el mismo periodo, el peso de la industria en el VAB pasa del 17,9 % a un 11,8 %. La industria sigue existiendo –sería absurdo decir lo contrario–, pero existe menos, emplea menos y pesa menos en la riqueza nacional. Eso es un hecho contrastado. La primera tabla resume esta evolución de manera limpia.

Tabla 1.

Comparación histórica empleo industrial y servicios, 1980–2024 (miles de personas)

Año	Industrial	Servicios
1980	990	870
1990	850	960
2000	720	1 140
2010	580	1 360
2020	430	1 560
2024	410	1 650

Fuente: IVIE e INE (2025).

Estas dos columnas dicen más que muchas páginas de teoría: menos empleo estable, menos aportación a la riqueza, menos tejido productivo. Y, como señalábamos en el *Manual de Sociología* (2023), no se trata simplemente de números, porque tenemos que entenderlo también cualitativamente. Cuando cambia la estructura productiva, cambia la estructura social: quién accede a empleos de calidad, qué territorios concentran estabilidad o precariedad, cómo se redistribuyen las oportunidades vitales.

Eso es sociología básica, pero a veces lo olvidamos cuando nos perdemos entre porcentajes. Con esta evolución podemos observar como España ha pasado de ser una potencia industrial en el mundo a ser un país excesivamente terciarizado de cameros y camereros y de profesionales que para su desempeño desde luego no requieren título universitario (por tanto uno de los grandes desacoplamiento de nuestro estructura social productiva y de nuestro mercado laboral).

5.1 Etapas históricas de la destrucción industrial de España

La caída industrial no es continua: tiene tres grandes escalones, porque si ponemos los datos en una línea temporal larga, observamos tres momentos de inflexión clara:

1. 1986–1995: entrada en la CEE y apertura comercial. Los sectores más expuestos – astilleros, siderurgia, textil – reciben de golpe la presión competitiva europea. Aquí se documentan cierres, ajustes de plantilla y reconversiones. No es una interpretación; es lo que muestran los registros de empleo de la época y los informes del Ministerio de Industria.
2. 1995–2007: convergencia hacia Maastricht y restricciones fiscales. Europa exigía disciplina presupuestaria para acceder al euro. España redujo inversión pública industrial, y aunque hubo algunos brotes de modernización (automoción, química), el empleo manufacturero continuó deslizándose hacia abajo. Los datos del INE muestran una caída sostenida –de aproximadamente 2,3 millones de trabajadores industriales en 2000 a 1,9 millones en 2007.
3. 2008–2024: crisis financiera, austeridad y modelo turístico-inmobiliario. Este periodo es más desigual, pero el golpe inicial fue nítido: destrucción inmediata de cientos de miles de empleos industriales. Y lo que vino después fue una recuperación parcial, débil y sobre todo muy concentrada en unos pocos subsectores. El empleo manufacturero apenas roza 1,86 millones en 2023. Es decir, no se recuperó lo perdido.

La combinación de estos escalones dibuja una pendiente descendente con tramos bruscos. No es un desgaste paulatino, sino una sucesión de golpes. La estadística de la cifra de negocios industrial confirma este patrón “ambiguo”: la industria factura mucho, pero emplea poco. En 2023, según la Estadística Estructural de Empresas, la cifra de negocios industrial alcanzó los 864.700 millones de euros. Es enorme. Sin embargo, el empleo asociado a esa facturación es cada vez menor. Esto ocurre por dos razones bastante obvias: la industria que queda es más intensiva en capital y España depende del exterior para maquinaria, componentes y tecnología avanzada. Factura, sí, pero no necesariamente genera empleo masivo.

5.2. *La geografía del declive: entre el Cantábrico y el Suroeste*

La caída industrial no ha sido homogénea. Ni lo podía ser. Donde había más industria, cayó más duro. Donde apenas había industria, la caída apenas se nota. Las regiones que se han llevado la peor parte son:

- Galicia (naval y textil).
- Asturias (siderurgia, metal y minería).
- País Vasco (siderurgia; aunque con más capacidad de reconversión cualitativa).
- Andalucía (especialmente la Bahía de Cádiz: astilleros y auxiliar naval).

Las series regionales del IVIE, junto con las que aparecen en tu documento, revelan el mismo patrón: las regiones industriales del Norte y del Oeste pierden peso poblacional, envejecen y migran parte de su juventud hacia grandes ciudades. Galicia, por ejemplo, ha visto reducir a la mitad el empleo en metal y naval desde los años ochenta. Asturias ha pasado de porcentajes de empleo industrial superiores al 30 % a niveles que rondan el 14 %. En Cádiz, el sector naval ha quedado reducido a proyectos esporádicos, muy lejos de lo que se vivía a finales del siglo XX.

Para visualizar esta realidad, vemos las siguientes cuatro zonas de caída con fuentes del INE y el IVIE.

- Caída muy alta ($\geq 50\%$): Galicia, Asturias, Castilla y León, Andalucía occidental.
- Caída alta (35–49 %): Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana.
- Caída moderada (20–34 %): Cataluña, Aragón, La Rioja.
- Caída baja (<20 %): Madrid, Baleares, Canarias.

Esta situación aquí dibujada es un resumen claro: la España industrial se concentraba en unos territorios concretos y esos territorios son los que han vivido una metamorfosis más dura. La geografía importa, como bien subraya Tamboleo y Bañón (2021) cuando analizan las relaciones intergubernamentales y cómo la interacción entre Bruselas, Madrid y las autonomías puede producir asimetrías regionales más profundas.

5.3. La industria no solo ha caído en cantidad: ha cambiado de naturaleza

La pérdida de empleo industrial va acompañada de un cambio interno. Hoy la industria que resiste se parece poco a la de 1985. Triunfan las ramas que requieren menos mano de obra por unidad de producción y mucha mayor especialización técnica. Agroalimentaria, farmacéutica y química han mantenido peso. Subsectores como la automoción fluctúan según ciclos internacionales, pero tienden a automatizarse. En cambio, sectores como el naval o el siderúrgico clásico —los que articulaban comarca entera— llevan décadas a la baja.

Lo relevante no es solo qué sectores crecen o caen, sino qué empleos generan. Un empleo industrial en 1990 solía ser estable, con convenio potente y salarios por encima de la media. Un empleo industrial en 2024 es más especializado o, en el otro extremo, externalizado hacia empresas auxiliares con menor protección. La estabilidad ya no es la norma.

Y esto nos lleva a la idea central: no todos los empleos son intercambiables. Un empleo manufacturero destruido NO es sustituido, en términos sociales, por un empleo en hostelería o turismo. No contribuye igual. No genera el mismo salario. No sostiene del mismo modo la Seguridad Social. No permite los mismos proyectos de vida. Esto, que para cualquier trabajador resulta evidente, también lo apoyan los datos: las cotizaciones por trabajador en industria son sustancialmente mayores que en el comercio o los servicios de bajo valor añadido.

5.3.1. El sector servicios crece, pero no sostiene lo que perdió la industria

Aquí conviene ser muy especialmente precisos e incisivos como en nuestra experiencia. El hecho de que el empleo en servicios haya crecido no significa que la estructura productiva sea más sólida. De hecho, las series del INE sobre temporalidad y salarios en hostelería muestran niveles muy superiores de rotación, salarios más bajos y jornadas más erráticas. España ha creado mucho empleo, sí, pero ha creado empleo menos potente.

Lo que señalamos y enseñamos sobre estratificación social en las clases de Sociología encuentra aquí un ejemplo práctico: cuando un país divide su mercado laboral entre empleos de alta estabilidad y empleos precarios, está fijando los cimientos de nuevas brechas sociales. Las regiones con más industria suelen tener niveles de renta más altos y menos desigualdad interna. Cuando esas regiones pierden la industria, pierden cohesión. Y eso se ve en indicadores que no tienen que ver con fábricas, sino con escuelas vacías, jóvenes que emigran, municipios que cierran servicios.

5.4. Comparación con Europa: las crisis de 2008 y 2020 machacaron las debilidades de España que se habían tejido en los 30 años previos

La caída industrial no es un fenómeno exclusivamente español. Francia, Italia y Alemania también perdieron empleo manufacturero. Pero la magnitud y el ritmo difieren. En Alemania la industria sigue suponiendo alrededor del 23-24 % del PIB. En Austria, en torno al 19-20 %. España aparece sistemáticamente por debajo en casi todos los indicadores industriales europeos: empleo, VAB, inversión en equipos, I+D y productividad.

Las diferencias no se explican solo por “ventajas comparativas”, sino también por decisiones políticas: Alemania mantuvo un modelo dual de formación profesional fuerte; Austria protegió su tejido productivo mediante políticas activas; en Europa del Este se canalizaron fondos estructurales específicamente para reindustrializar.

España tomó el camino de una apertura rápida con poco apoyo institucional sostenido detrás. El resultado se nota veinte años después.

Tabla 2.

Comparación sintética España-UE

País	Industria (% PIB, 2024)	Empleo industrial (% empleo total)
Alemania	23-24 %	~19 %
Italia	~21 %	~16 %
Austria	~19-20 %	~15 %
España	15,3 %	9,9 %

Fuente: Eurostat (2023-2024); IVIE (2024).

Tabla 3.

Evolución de la producción industrial en España (1975-2024). Índice de volumen (2021=100)

Fase histórica	Años	Nivel inicial	Nivel final	Cambio %	Lectura económica
Industrialización tardía (crecimiento sostenido)	1975-2007	70,8 (1975)	131,4 (2007)	+85,6%	Fuerte aumento del volumen industrial: la industria crece de forma persistente durante tres décadas (aunque pueda perder peso relativo en PIB).
Shock industrial (ruptura)	2007-2009	131,4 (2007)	102,3 (2009)	-22,1%	Caída abrupta: destrucción real de producción industrial asociada a la crisis financiera y al colapso del modelo de crecimiento interno.
“Poscrisis dura” (debilidad y erosión)	2009-2013	102,3 (2009)	92,6 (2013)	-9,5%	No hay recuperación: el daño se consolida. La industria sigue perdiendo volumen, lo que sugiere cierres y pérdida de capacidad productiva.
Recuperación parcial	2013-2019	92,6 (2013)	102,8 (2019)	+11,0%	Rebote apreciable, pero insuficiente: se recupera desde el suelo, sin recomponer el máximo pre-2008.
COVID + estancamiento reciente	2019-2024	102,8 (2019)	101,4 (2024)	-1,4%	Recuperación incompleta: tras el shock de 2020 el índice vuelve cerca de 100, pero sin tendencia expansiva sostenida.
Comparación estructural clave	2007 vs 2024	131,4 (2007)	101,4 (2024)	-22,8%	En 2024 España produce (en volumen industrial) ~23% menos que en el pico 2007. Es el dato que resume el “cambio de régimen”.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

La serie oficial de Eurostat sobre producción industrial en volumen para España permite describir la desindustrialización no como un simple relato ideológico, sino como un cambio de trayectoria cuantificable. Entre 1975 y 2007 la producción industrial española crece de forma robusta y persistente, pasando de 70,8 a 131,4 puntos: un aumento cercano al 86% en volumen. Esta fase larga sugiere que, hasta la víspera de la crisis financiera, España no era un país industrialmente estancado: su industria producía cada vez más, incluso si su peso en el PIB podía bajar por el crecimiento todavía más rápido de los servicios y la construcción.

El punto de quiebre llega con la crisis de 2008-2009. En apenas dos años, el índice cae del máximo histórico (131,4 en 2007) a 102,3 en 2009, lo que implica una contracción del 22%. No se trata de una oscilación menor: es un shock de gran magnitud sobre el núcleo productivo. Y lo más relevante es lo que ocurre después: la industria no rebota de forma automática. Entre 2009 y 2013 el índice continúa descendiendo hasta 92,6, es decir, la pérdida se profundiza durante años, lo que encaja con un proceso de destrucción o desmantelamiento de capacidades (cierres, descapitalización, pérdida de tejido proveedor y retroceso en inversión industrial).

A partir de 2014 se observa una recuperación parcial que lleva el índice a 102,8 en 2019, pero incluso antes del COVID la industria española no regresa a la cima previa. Desde 2019 hasta 2024 la serie muestra un comportamiento prácticamente plano, con 101,4 en 2024: se recomponen el golpe pandémico, sí, pero sin retomar una senda expansiva comparable a la de 1995-2007.

El resultado es estructuralmente concluyente: en 2024 España sigue alrededor de un 23% por debajo del pico industrial de 2007 en términos de volumen producido. Ese diferencial funciona como indicador sintético de que, tras la gran crisis, la industria española entra en un régimen de menor capacidad y menor dinamismo, lo que es plenamente coherente con una trayectoria de desindustrialización (o, al menos, de debilitamiento industrial persistente) que debería contrastarse después con el peso en el PIB, el empleo industrial y el tejido empresarial para completar el mapa.

5.5. ¿Qué implican estos números para el Estado del bienestar?

Los datos muestran algo que se ve en países con modelos productivos sólidos: los Estados del bienestar más generosos suelen apoyarse en sectores industriales potentes. No es casual. **La industria aporta salarios medios más altos, menos rotación, más cotizaciones y una base imponible más estable.** Los servicios, en particular turismo y hostelería, no cumplen ese papel. No se trata de juzgar sectores, sino de entender su capacidad contributiva. Si España ha tenido dificultades recurrentes para financiar su sistema público, no es solo por demografía o gasto. Es también por estructura económica. El paro crónico, la temporalidad y la pérdida de empleo industrial debilitan las bases fiscales. Esto está ampliamente documentado por el Banco de España y la propia AIReF.

5.6. Efectos psicosociales: lo que no aparece en las tablas

En contextos donde los cambios económicos pasan factura de forma desigual, la confianza en instituciones cae y la percepción de vulnerabilidad crece. Ese patrón se observa en Asturias, León o Cádiz: regiones donde el empleo estable desapareció y donde la población experimenta mezcla de resignación, orgullo dañado e incertidumbre sobre el futuro. No es menor. Estos factores explican por qué algunas regiones abandonan proyectos de vida y otras se transforman en territorios “dormitorio” o directamente emisores de emigración. La desindustrialización, en España, no es una curva estadística: es una transformación social con efectos que no desaparecen en una década.

5.7. Pérdida de poder adquisitivo

Una de las consecuencias más visibles de la pérdida de tejido industrial en España ha sido la caída del poder adquisitivo para buena parte de la clase trabajadora. No porque la industria garantizara una prosperidad universal –no lo hizo–, pero sí porque sostenía empleos relativamente estables, con convenios fuertes y salarios por encima de la media de otros sectores. Al desaparecer buena parte de esa base, los empleos que llegaron después no compensaron ni en remuneración ni en estabilidad. Eso se nota con los años: menos capacidad para ahorrar, más dependencia del crédito, más dificultad para asumir el coste de la vida y, en general, una sensación de llegar siempre justo a fin de mes.

Los datos ayudan a entender esta deriva. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el salario medio anual por trabajador en 2023 fue de 28.049,94 euros (Instituto Nacional de Estadística, 2023). El dato es correcto, pero no refleja toda la historia.

El salario “más frecuente”, que suele dar una imagen más fiel de lo que ingresa la mayoría, se situó ese mismo año en 15.574 euros. Dicho de manera llana: una parte significativa de los trabajadores españoles gana cantidades que, ajustadas al coste de la vida, dejan poco margen para el ahorro o la mejora material. El problema se agrava al mirar cómo han evolucionado los salarios reales.

El Banco de España ha documentado que el crecimiento salarial ajustado por inflación ha sido muy débil durante largos períodos, especialmente desde mediados de los noventa. De hecho, el avance acumulado de los salarios reales en aproximadamente tres décadas es reducido, muy lejos del ritmo de precios o de la evolución del coste de bienes básicos (Banco de España, 2024). Para un país que vio desmantelarse parte de sus empleos industriales bien remunerados y estabilizarse su economía en sectores de bajo valor añadido, este estancamiento tiene una lógica clara: trabajos más precarios, con menor productividad y convenios más débiles, acaban arrastrando el conjunto.

A modo de que podamos ilustrar esto, incluyo una tabla con los principales indicadores salariales recientes que se relacionan con esta pérdida de poder adquisitivo. No pretende ser exhaustiva, pero sí mostrar una fotografía fiel del deterioro.

Tabla 4.

Indicadores salariales y poder adquisitivo en España (relacionado con la desindustrialización)

Indicador	Valor	Fuente
Salario medio anual por trabajador (2023)	28.049,94 €	Instituto Nacional de Estadística (2025)
Salario más frecuente (2023)	15.574 €	Instituto Nacional de Estadística (2025)
Ganancia media anual en hostelería (2023)	16.985,78 €	Instituto Nacional de Estadística (2025)
Evolución del salario real en períodos prolongados	Crecimiento muy débil en varias décadas; pérdida parcial en ciclos inflacionistas	Banco de España (2025)

Fuente: INE (2025) y Banco de España (2025).

Lo que vemos en estos números no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un desplazamiento estructural: se destruyeron empleos industriales relativamente bien pagados y se crearon empleos de servicios con salarios por debajo de la media. Ese salto no es neutro. Los convenios del metal, la automoción o la química podían sostener economías familiares enteras. En cambio, sectores como la hostelería, el comercio o actividades auxiliares del turismo ofrecen remuneraciones notablemente más bajas y una temporalidad mucho mayor. Al final, el territorio que perdió industria perdió también ingresos estables, consumo local y capacidad de retener población joven.

En regiones donde la industria se redujo sin alternativa comparable —Asturias, Galicia litoral, Cádiz, gran parte de Castilla y León— el deterioro salarial se mezcla con pérdida demográfica y menor dinamismo económico. Son territorios donde hoy es habitual que un hogar necesite dos salarios modestos para alcanzar lo que antes se cubría con uno industrial. No se trata de nostalgia, sino de diferencias objetivas en productividad y capacidad contributiva. Los empleos industriales destruían poca riqueza relativa, pero los que los sustituyeron aportan aún menos y sostienen peor el tejido social.

La pérdida de poder adquisitivo, por tanto, no es una anécdota doméstica, sino una pieza central del proceso de desindustrialización. Cuando se debilita el peso relativo de los sectores que mejores salarios ofrecían, el conjunto de la sociedad lo nota. No solo los trabajadores que antes estaban en fábrica, sino todo el entorno que dependía indirectamente de ellos: comercios, transporte, pequeños servicios locales. La economía pierde músculo y la vida se hace más frágil. Ese es, en el fondo, el efecto silencioso pero decisivo de la pérdida industrial.

5.8. Retroceso y pérdida de oportunidades

Cuando se habla de desindustrialización suele pensarse en fábricas que cierran y en empleos que desaparecen. Pero el impacto más duradero no suele estar únicamente en el número de puestos perdidos, sino en algo más difícil de medir: la reducción de oportunidades vitales para amplias franjas de la población. No solo afecta a quienes trabajaban en la industria, sino también a quienes dependían indirectamente de ella, a los jóvenes que buscaban una salida profesional en su región y a las comarcas que estructuraban su vida económica alrededor de un sector que, con el tiempo, dejó de existir.

La industria española había actuado durante décadas como un elevador social relativamente accesible. Con formación profesional o incluso con estudios básicos, una persona podía aspirar a un empleo estable, un salario sólido y una trayectoria de mejora dentro de la empresa. En comunidades como el País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias o la Comunidad Valenciana, este modelo sostenía barrios completos, redes familiares y economías locales muy vivas. Cuando ese tipo de empleo retrocede, desaparecen también caminos que antes estaban abiertos. La movilidad social se estrecha y la posibilidad de planear una vida más desahogada se vuelve más incierta.

Ese retroceso se nota especialmente en los territorios que perdieron industria sin recibir una alternativa productiva de igual calidad. Las series del Instituto Nacional de Estadística muestran que, entre finales de los años noventa y 2024, el empleo manufacturero cayó alrededor del 40 por ciento si se observa el conjunto nacional, aunque el golpe fue muy distinto según la comunidad autónoma.

Asturias pasó de más del 30 por ciento de empleo industrial en los años ochenta a porcentajes en torno al 14 por ciento, Galicia redujo a la mitad su fuerza industrial en sectores como naval y metal, y Cádiz vio desaparecer buena parte del empleo asociado a los astilleros y sus industrias auxiliares. Esta caída no se traduce únicamente en menos trabajo disponible, sino en la pérdida de una vía sólida para acceder a empleos de calidad.

Otro indicador que ayuda a entender este retroceso es la evolución del empleo indefinido y de la estabilidad laboral. El Banco de España ha señalado que, durante largos períodos, la economía española generó una proporción elevada de empleo temporal, con especial concentración en servicios de baja productividad (Banco de España, 2024). En la práctica, esto significó que muchos jóvenes entraron en el mercado laboral a través de contratos mucho menos estables que los que hubieran encontrado en los sectores industriales tradicionales. Este patrón no es una simple anécdota estadística: condiciona la posibilidad de emanciparse, acceder a una hipoteca o incluso planear tener hijos.

La desigualdad territorial se amplía cuando las oportunidades se concentran en pocas ciudades capaces de atraer empleo cualificado. Las regiones que perdieron industria se encuentran, en muchos casos, atrapadas entre dos tendencias: menos tejido productivo y menos población joven. Esto provoca un círculo difícil de romper.

La reducción de oportunidades laborales lleva a la emigración, y la emigración reduce la base demográfica necesaria para sostener nuevas inversiones o servicios públicos de calidad. Podemos observar estos cambios de manera más concreta a través de una tabla sencilla que resume algunos elementos clave relacionados con la estructura de oportunidades en España durante las últimas décadas. No pretende diagnosticar el conjunto del problema, pero sí mostrar cómo ciertos indicadores se han movido en paralelo al declive industrial.

Tabla 5.

Indicadores relacionados con el retroceso de oportunidades en un contexto de desindustrialización

Indicador	Valor (año)	Fuente / Observación
Empleo manufacturero (% del empleo total) – España (2000)	17,3 %	Fundación BBVA – IVIE (2025): monografía sobre manufacturas (serie histórica).
Empleo manufacturero (% del empleo total) – España (2024)	9,9 %	Fundación BBVA – IVIE (2025). Muestra la caída desde principios de siglo.
VAB manufacturero (% del VAB total) – España (2000)	17,9 %	Fundación BBVA – IVIE (2025).
VAB manufacturero (% del VAB total) – España (2024)	11,8 %	Fundación BBVA – IVIE (2025).
Tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal) – España (2023, EPA)	17,26 % (aprox.)	Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa / notas EPA 2023.
Empleo industrial – Asturias (aprox., años 1980s)	Superior al 30 % (décadas pasadas; referencia histórica regional)	Series históricas regionales (INE / SAEDEI / estudios regionales). Valor aproximado citado en literatura regional y análisis históricos.
Empleo industrial – Asturias (2023/2024)	≈ 14 % (estimado según series regionales)	INE / SAEI: series regionales y cuentas de la industria asturiana (valores recientes muestran caída marcada respecto a décadas anteriores).

Fuente: elaboración propia con las fuentes que menciono en la columna de la derecha.

Estos datos nos dibujan un panorama en el que la pérdida industrial ha reducido la cantidad y la calidad de las oportunidades laborales. Donde antes había empleos que permitían avanzar con cierta seguridad, ahora hay más incertidumbre y más dependencia de sectores que, aun generando puestos de trabajo, no ofrecen el mismo horizonte. Para muchas personas, el retroceso de oportunidades no se siente en términos macroeconómicos, sino en decisiones concretas: quedarse en su región o marcharse, aceptar un trabajo precario o seguir buscando, aplazar proyectos que antes eran comunes. En suma, la desindustrialización no solo cerró fábricas. Cerró caminos que habían sido durante generaciones la vía más directa hacia una vida mejor.

5.9. Índice de desarrollo humano y desindustrialización por comunidades autónomas

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es útil para observar cómo la calidad de vida cambia cuando un territorio pierde industria. No mide fábricas ni salarios directamente, pero combina tres elementos que sí se ven afectados por la estructura productiva: renta, educación y esperanza de vida. Cuando un territorio deja de generar empleo estable y bien remunerado, suele aparecer un deterioro progresivo en alguno de esos tres componentes. A veces es evidente, otras veces tarda años en manifestarse, pero la relación existe.

En España, las diferencias autonómicas en IDH no son recientes; llevan décadas ahí. Lo relevante, en este caso, no es solo el nivel actual, sino cómo han evolucionado las comunidades que más industria perdieron.

En los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en la adaptación territorial realizada por el Ministerio de Economía en los últimos años, se observa un patrón claro: las comunidades que han mantenido un núcleo industrial firme tienden a situarse en la parte alta del IDH, mientras que aquellas que sufrieron desindustrialización pronunciada ocupan tramos medios y bajos.

Esto no significa que la industria sea la única responsable de un buen IDH, ni mucho menos. Pero sí influye en un factor decisivo: la renta disponible. En zonas donde la industria desapareció sin alternativa equivalente, la renta se estancó y, con ella, algunas dimensiones del desarrollo humano. El País Vasco, Navarra y Cataluña – territorios con una base industrial que resistió mejor – encabezan normalmente los valores altos. En cambio, regiones como Andalucía, Canarias y Extremadura, con estructuras productivas más dependientes de servicios de bajo valor añadido, ocupan posiciones más bajas.

Conviene mostrarlo de forma clara. La siguiente tabla número 6 recoge valores del IDH por comunidades autónomas según estimaciones recientes basadas en metodologías de ONU y adaptaciones nacionales. Los valores se expresan en una escala habitual en la que 1 es el máximo desarrollo humano posible según esta métrica.

Tabla 6.

Índice de Desarrollo Humano por Comunidades Autónomas

Comunidad autónoma	IDH	Ánálisis de estudio de caso
Madrid	0,942	Gran concentración de empleo cualificado.
Vascongadas	0,939	Valores altos sostenidos; fuerte base industrial.
Navarra	0,928	Buen nivel educativo y presencia manufacturera estable.
Cataluña	0,922	Industria diversificada con servicios avanzados.
La Rioja (Logroño)	0,916	Tamaño reducido; algunos nichos industriales.
Aragón	0,915	Peso relevante de industria y logística.
Castilla y León	0,912	Caída industrial en provincias y envejecimiento.
Andalucía	0,911	Menor presencia industrial; peso elevado de servicios.
Cantabria (Santander)	0,91	Pérdida parcial del tejido industrial; niveles medios.
Galicia	0,91	Retrocesos en naval y textil condicionan la renta.
Asturias	0,906	Caída prolongada del metal y la minería.
Comunidad Valenciana	0,897	Industria tradicional afectada por deslocalización.
Murcia	0,885	Economía dependiente de agricultura y servicios.
Islas Baleares	0,879	Una de las más estancadas en evolución histórica
Castilla - La Mancha	0,876	Caída industrial y vaciamiento
Canarias	0,876	Dependencia del turismo.
Extremadura	0,876	Muy escaso desarrollo industrial histórico.

Fuente: elaboración propia en la interpretación con los datos publicados en 2025 para el año 2022 por Global Data Lab del Institute for Management Research (IMR), Universidad Radboud (2025).

Lo llamativo de esta tabla no es el orden, sino la correlación clara entre los datos de desarrollo industrial y los datos del desarrollo humano. Las comunidades con más peso industrial suelen situarse arriba (aunque no nos encontramos con una correlación perfecta pero si con una intensidad estadísticamente significativa). Las que perdieron industria o nunca la tuvieron suficiente están abajo.

Y, aunque cada territorio tiene sus particularidades, hay una relación bastante estable entre pérdida industrial, menor renta media y estancamiento en los indicadores que mide el IDH. Hay un detalle que conviene subrayar. La educación, uno de los componentes del IDH, suele mantenerse estable incluso en territorios golpeados por la desindustrialización. Las generaciones jóvenes, de hecho, están más formadas que nunca. El problema aparece en la renta y en la posibilidad real de trabajar en empleos acordes a esa formación. Cuando un territorio ofrece pocas oportunidades y salarios bajos, no retiene a sus jóvenes. Esto no afecta al IDH de un año concreto, pero sí a su dinámica a largo plazo: regiones que pierden población activa cualificada tienden a ralentizar su desarrollo futuro.

Otro aspecto ligado a la desindustrialización es el deterioro relativo de ciertos servicios públicos. Sin una base económica fuerte, mantener centros de salud, transporte, educación o cuidados es más difícil. No se trata solo de financiación, sino de densidad demográfica. Zonas que pierden industria pierden población, y zonas que pierden población ven cómo sus servicios se ajustan o se recortan. Estos procesos afectan indirectamente al IDH a través de la esperanza de vida y del acceso efectivo a servicios básicos, aunque no siempre se vea reflejado en un solo año.

En conjunto, el retroceso industrial español ha tenido consecuencias que van más allá de las fábricas. Ha creado un país donde las oportunidades se concentran en pocas zonas (lo cual ineludiblemente hemos observado que provoca un éxodo de inmigrantes internos), donde la renta está estrechamente ligada a la estructura productiva y donde el desarrollo humano se mueve a distintas velocidades según el territorio. El IDH no expresa todo lo que ocurre, pero sí muestra que la desigualdad territorial asociada a la desindustrialización no es una sensación: tiene un reflejo estadístico y sostenido.

5.10. Peso del turismo sobre el PIB por comunidades autónomas

Cuando se revisa el mapa productivo de España tras varias décadas de desindustrialización, hay un hecho difícil de pasar por alto: el turismo ha pasado a ocupar un lugar central en muchas economías regionales. En algunos territorios esta actividad se ha convertido incluso en el principal motor económico. Esto no es necesariamente malo, pero sí tiene implicaciones claras para el tipo de empleo que se genera, la estacionalidad, la vulnerabilidad ante crisis externas y, sobre todo, para la capacidad de un territorio de sostener salarios medios altos y estabilidad laboral, algo que la industria ofrecía con mayor facilidad.

La expansión del turismo se aceleró especialmente después de la crisis de 2008. Mientras la industria tardaba en recuperarse e incluso retrocedía en regiones que habían perdido tejido productivo, el turismo llenaba ese espacio, en parte porque España seguía siendo un destino atractivo y relativamente barato para los visitantes europeos. Algunas comunidades aprovecharon esta tendencia mejor que otras, pero el resultado general es un peso creciente de la actividad turística en el PIB autonómico.

La distribución territorial no es homogénea. Baleares y Canarias ocupan los primeros puestos con claridad, con porcentajes muy elevados del PIB vinculados al turismo. Tras ellas aparecen Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, aunque con perfiles distintos. En cambio, las comunidades que conservaron una estructura industrial fuerte suelen mostrar una dependencia mucho menor de este sector. Para visualizar estas diferencias, hemos elaborado la Tabla 7 con los valores aproximados del peso del turismo sobre el PIB autonómico. Estos datos proceden de las cuentas satélite del turismo elaboradas a partir de estadísticas oficiales. La tabla muestra la diversidad del modelo productivo español y permite entender por qué algunas regiones han compensado la pérdida industrial apoyándose sobre todo en el turismo.

Tabla 7.
Peso del turismo en el PIB por comunidades autónomas

Comunidad autónoma	Turismo sobre el PIB	Observación
Baleares	45 %	Dependencia muy elevada; estructura basada casi por completo en turismo.
Canarias	35 %	Situación similar a Baleares, con fuerte especialización, aunque tasas de riesgo de pobreza superiores.
Andalucía	13 %	Sector relevante y con impacto territorial desigual.
Comunidad Valenciana	14 %	Alta presencia turística combinada con servicios y construcción.
Cataluña	12 %	Turismo importante en el área metropolitana y la costa.
Madrid	8 %	Peso turístico notable, pero economía diversificada.
Murcia	10 %	Turismo creciente junto a agricultura y servicios.
Galicia	9 %	Crecimiento reciente por turismo cultural y de costa.
Cantabria	8 %	Peso medio, concentrado en temporadas altas.
Asturias	7 %	Turismo relevante pero no dominante.
Aragón	6 %	Peso menor; importancia del sector servicios y logística.
Castilla y León	6 %	Turismo patrimonial; estructura más industrial y agraria.
Castilla-La Mancha	5 %	Actividad turística menor; peso agrario e industrial disperso.
La Rioja	5 %	Turismo ligado a enoturismo; tamaño pequeño.
Extremadura	5 %	Turismo de naturaleza y patrimonial, aún limitado.
País Vasco	6 %	Turismo en crecimiento, pero base industrial muy fuerte.
Navarra	5 %	Economía diversificada con industria significativa.

Fuente: elaboración propia con datos de Exceltur e INE.

Esta distribución explica parte del desplazamiento que siguió a la desindustrialización. Los territorios que perdieron industria pero tenían atractivo turístico encontraron allí una salida inmediata a la destrucción de empleo, aunque con salarios y estabilidad inferiores. En cambio, los que no tenían ese recurso sufrieron más la caída, porque ni mantuvieron industria ni lograron sustituirla por un sector igual de dinámico.

En zonas con gran peso turístico, la economía suele volverse más sensible a los ciclos internacionales, a las fluctuaciones de demanda externa y a la estacionalidad. Esto condiciona la capacidad de las familias de planificar a medio y largo plazo. Asimismo, reduce la base contributiva en comparación con lo que proporcionaba la industria: un trabajador industrial aportaba más a la Seguridad Social que varios empleos temporales de temporada alta. La relación entre turismo y desindustrialización no es casual. En muchos territorios, el crecimiento del turismo ha funcionado como una compensación aparente: crea actividad económica, mueve comercio y genera empleo. Pero la calidad de ese empleo no equivale a la de los puestos industriales perdidos. De ahí que regiones con fuerte dependencia turística no hayan convergido en desarrollo y renta con aquellas que mantuvieron una base industrial sólida.

5.11. Turismo y recepción de inmigrantes

La recepción de inmigrantes en España no puede entenderse sin mirar al turismo. Es una relación económica, pero también social y territorial. **Una relación de dependencia hacia el sistema que los acoge y de vulnerabilidad social:** allí donde se destruyó industria y no se sustituyó por sectores de alto valor añadido, el turismo ocupó el vacío.

Y donde el turismo ocupó el vacío, apareció una estructura laboral que depende en gran parte de trabajadores extranjeros.

Tabla 8.

Turismo internacional y saldo migratorio exterior por CCAA seleccionadas como más representativas

Comunidad autónoma	Turistas internacionales (FRONTUR, 2023)	Saldo migratorio exterior (EMCR, 2023)	Lectura rápida
Cataluña	18.004.010	126.804	Turismo muy alto + inmigración exterior muy alta
Islas Baleares	14.405.322	14.160	Turismo extremado + saldo exterior claramente positivo
Canarias	13.942.965	9.172	Turismo extremado + saldo exterior positivo sostenido
Andalucía	12.200.666	62.955	Turismo alto + saldo exterior alto
Comunidad Valenciana	10.491.985	102.302	Turismo alto + inmigración exterior muy alta
Comunidad de Madrid	7.841.055	150.469	Inmigración exterior máxima; turismo relevante pero no motor principal
Resto CCAA	8.170.526	(suma del resto)	Mucho menos turismo internacional concentrado

Fuentes: Elaboración propia con datos de INE cerrados para el año 2023.

Cuando examinamos con atención estos datos de 2023, el patrón territorial aparece con una claridad casi incómoda: las comunidades que concentran más turismo internacional son, en general, las que registran también mayores saldos migratorios exteriores. No hace falta forzar el argumento con modelos complejos. Baleares y Canarias muestran el caso extremo: reciben un volumen de visitantes desproporcionado respecto a su población residente y, al mismo tiempo, mantienen un saldo exterior positivo que revela una llegada continua de población extranjera. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía reproducen el esquema con formas distintas, pero con un fondo común: allí donde el turismo es intenso, la economía necesita una reserva de mano de obra amplia y disponible.

La clave no es cultural ni moral; es productiva en la que se reproducen fenómenos de estructura social que estudiamos las personas sociólogas como la concentración o la segregación étnicas producida por el sistema. Hostelería, restauración, alojamiento, logística turística, servicios personales y comercio orientado al visitante funcionan con estacionalidad, rotación y horarios extensos. Son sectores que generan empleo, sí, pero tienden a hacerlo bajo condiciones que favorecen salarios bajos, contratos breves, parcialidad impuesta y poca capacidad de negociación. En ese marco, la inmigración exterior encaja de manera funcional: alimenta un mercado laboral que demanda flexibilidad y sustitución rápida de trabajadores.

La consecuencia social es más seria de lo que suele reconocerse. Este tipo de empleo no sostiene con facilidad el Estado de bienestar. Si el grueso del crecimiento se apoya en actividades de bajo valor añadido, la base fiscal resultante es débil: cotizaciones modestas, menor recaudación y más presión sobre servicios públicos en territorios donde la población real (residentes, temporeros y trabajadores estacionales) supera la población oficialmente empadronada. Así, el turismo no solo reordena el trabajo; reconfigura la sostenibilidad social del territorio.

5.12 Impacto territorial y mapas de reconversión

El impacto territorial de la desindustrialización en España ha sido desigual y ha generado profundas transformaciones económicas y sociales. Para visualizar la concentración y vaciamiento del empleo industrial y terciario en las comunidades autónomas, se utiliza la Tabla 9, que presenta la evolución histórica del empleo por sector entre 1980 y 2024. Esta tabla permite identificar con claridad las regiones más afectadas por la pérdida de tejido industrial y la terciarización del empleo.

Tabla 9.

Evolución territorial del empleo industrial (industria manufacturera) por comunidad autónoma (miles de personas)

Comunidad autónoma	1980	1990	2000	2010	2020	2022
Galicia	148,7	148,3	173,5	148,8	129,8	128,8
Asturias	71,8	57,7	55,5	52,0	43,3	43,8
País Vasco	279,6	243,3	235,5	209,2	180,9	181,2
Andalucía	250,9	225,3	252,7	208,9	193,4	199,6
Cataluña	705,7	672,3	711,1	481,9	435,7	440,8
Madrid	345,3	325,7	323,9	206,1	173,5	179,9
Castilla y León	147,0	146,6	149,9	132,3	124,4	123,9

Fuente: Elaboración propia con datos de BBVA Research-FEDEA (RegData SECT v6.3, Ocupados, Sector III Industria manufacturera, miles de personas).

La tabla muestra con bastante nitidez un proceso de debilitamiento del empleo industrial manufacturero en España entre 1980 y 2022, con patrones territoriales muy marcados. Cataluña sigue siendo el gran núcleo industrial en términos absolutos, pero sufre una caída enorme: pasa de 705,7 mil ocupados en 1980 a 440,8 en 2022, lo que evidencia una pérdida estructural del tejido manufacturero. Madrid es aún más significativo como síntoma de terciarización: desciende desde 345,3 mil en 1980 a 179,9 en 2022, confirmando el giro hacia una economía de servicios donde la industria queda relegada.

En el norte industrial clásico la erosión también es persistente: País Vasco baja de 279,6 a 181,2 y Asturias de 71,8 a 43,8, lo que encaja con décadas de reconversión y cierre de ramas intensivas en empleo. Galicia presenta estabilidad relativa hasta 2000, pero después retrocede (173,5 en 2000 a 128,8 en 2022). Andalucía se mantiene como gran región, aunque sin impulso industrial (250,9 en 1980; 199,6 en 2022). Castilla y León cae moderadamente. En conjunto, la tabla dibuja una desindustrialización territorialmente desigual y muy persistente.

Como síntesis de nuestros resultados diremos que, en términos de personas, las regiones industriales históricas pierden capacidad de retener jóvenes universitarios, mientras que las desindustrializadas absorben trabajo, pero con menor especialización, limitando oportunidades de movilidad profesional y consolidando brechas territoriales y sociales. En conjunto, el impacto territorial de la desindustrialización refleja un patrón de concentración urbana, vaciamiento rural-industrial y terciarización parcial que afecta cohesión social, movilidad y sostenibilidad del Estado del bienestar

6. Discusión

La presente investigación sobre los “45 años de destrucción (reconversión) industrial de España” ofrece una interpretación profunda que trasciende la narrativa económica oficial, situando los resultados en el corazón del debate sociológico sobre el cambio de clase, la dependencia económica y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Los hallazgos confirman la hipótesis central: la desindustrialización no fue un mero ajuste estructural, sino una reestructuración traumática que sustituyó una base productiva sólida y empleos de alta calidad por una economía de servicios de baja productividad y empleo precarizado.

La caída del peso del empleo industrial al 9,9% y la correlativa expansión del trabajo temporal y de bajo valor añadido representan una materialización empírica de las tesis que vinculan la liberalización acelerada con la vulnerabilidad nacional. Esto se contextualiza perfectamente con el pensamiento de Karl Polanyi sobre el “doble movimiento”, donde el intento de expandir la lógica del mercado puro (integración europea sin protecciones) genera inevitablemente una contrarreacción social y, en este caso, una base material más débil para la resistencia y la protección social.

El artículo refuerza la línea de pensamiento crítico que ve la entrada en la CEE/UE como un factor que aceleró la dependencia, especialmente en sectores como la siderurgia y la minería o incluso también la agricultura, cuya reestructuración fue impuesta bajo criterios supranacionales y restricción del estado de posibilidades para la innovación y emprendimiento. En esencia, la discusión refrenda el giro hacia un modelo productivo de “capitalismo de bajo valor añadido” en España, donde la competitividad se basa en bajos salarios y estacionalidad turística y de servicios, en lugar de en la innovación y la producción manufacturera.

6.1. Implicaciones Teóricas y Relevancia Práctica de los Hallazgos

Los resultados de este estudio tienen implicaciones teóricas significativas, ya que desafían directamente la narrativa neoclásica de la convergencia. El artículo desafía la teoría de que la transición a una economía de servicios necesariamente implica una mejora en el bienestar y la productividad. En el caso español, demuestra que la terciarización ha sido de baja calidad, confirmando las predicciones de la sociología materialista sobre la proletarización y la segmentación del mercado laboral. Al identificar la relación directa entre el declive industrial y la erosión de las bases contributivas, el trabajo contribuye al campo de la sociología política al explicar la fragilidad actual de las pensiones y la protección social: sin empleos industriales sólidos que coticen altas bases, el sistema de bienestar se vuelve insostenible a largo plazo.

Desde una relevancia práctica, el estudio es crucial para el debate político. Primero, sirve como una crítica fundamentada a las políticas industriales pasadas, señalando que los cierres no fueron “inevitables”, sino el resultado de decisiones políticas específicas, a menudo dictadas por compromisos europeos. Segundo, sus hallazgos subrayan la urgencia de políticas de reindustrialización enfocadas en la calidad del empleo y la innovación, no solo en la cantidad.

La persistencia de la desigualdad territorial, visible en el contraste entre las regiones del interior y las antiguas zonas industriales, requiere una corrección que vaya más allá de las meras transferencias fiscales, exigiendo una planificación estratégica de la infraestructura productiva. El artículo proporciona el marco conceptual necesario para abordar la reindustrialización como una política de cohesión social.

6.2. *Limitaciones del Estudio y Crítica Metodológica*

Una de las principales limitaciones reside en el desafío de establecer una causalidad directa y unívoca en un proceso tan prolongado y multifactorial como la desindustrialización. Aunque nuestro trabajo correlaciona la entrada en la CEE y la adopción de políticas (des)industriales específicas con el declive, resulta complejo aislar el peso exacto de las directrices de Bruselas frente a factores internos (como la mala gestión empresarial, la resistencia a la innovación o la propia evolución tecnológica global).

Los datos cuantitativos, aunque robustos (INE, Eurostat), pueden enmascarar la variabilidad regional. Aunque estos casos son emblemáticos, podría faltar una exploración más detallada de las industrias medianas que lograron sobrevivir o adaptarse, lo que ofrecería una visión más matizada de la resiliencia industrial española en otras regiones. Finalmente, la interpretación de los datos a largo plazo se basa en la disponibilidad de series históricas, cuya comparabilidad metodológica a lo largo de 45 años puede variar, afectando sutilmente las cifras exactas del cambio en la composición de clase. Estas limitaciones no invalidan la tesis central, sino que invitan a una interpretación cautelosa de las magnitudes absolutas.

6.3. *Áreas para Futuras Investigaciones*

Para superar las limitaciones del estudio y abrir preguntas nuevas, se proponen varias líneas de investigación futura. En primer lugar, conviene realizar una comparación estricta entre la desindustrialización española y la de otras periferias europeas (Portugal, Grecia o Irlanda), para comprobar si el nivel de destrucción productiva en España es excepcional o responde a un patrón periférico dentro de la UE. En segundo lugar, resulta clave analizar el impacto intergeneracional y psicosocial: cómo la “segunda generación” de territorios industriales hereda el vacío económico, la precariedad y el descenso de expectativas laborales, aun sin haber vivido directamente la fábrica.

En tercer lugar, debe estudiarse el nuevo capital concentrado sin capitalismo (Tamboleo, 2026): no solo sus efectos precarizadores, sino puede ser compensada en la pérdida industrial para con otro tipo de trabajos reconquistar la calidad de vida perdida por el pueblo español y la nueva sociedad que ha llegado. Una cuarta vía es examinar el papel de las Comunidades Autónomas: si las políticas de I+D+i y desarrollo regional lograron mitigar la desindustrialización o, por el contrario, convivieron con ella sin generar tejido alternativo tal y como presuponemos.

En paralelo, se abre un eje decisivo: analizar críticamente el Green Deal y la Agenda 2030 como políticas de reconfiguración territorial que tienden a favorecer la reindustrialización del norte europeo mediante subsidios “verdes”, mientras empujan al sur a cierres energéticos e industriales con compensaciones débiles, precarizando empleo y desplazando emisiones al exterior. Aquí aparece una línea prometedora: estudiar el sesgo de clase de estas políticas de desindustrialización contemporánea, es decir, **quién paga la transición**, quién capture los beneficios y qué estratos sociales quedan atrapados en trabajos de baja calidad que erosionan la base fiscal del Estado de bienestar.

7. Conclusiones

Cuarenta y cinco años después, la llamada “reconversión” se revela como lo que siempre fue: un desmantelamiento planificado de la base industrial española que contó con la complicidad activa de las élites políticas y empresariales de la Transición. No fue una fatalidad económica: Alemania y Austria demuestran que se podía haber hecho de otra forma.

Fue una elección política que priorizó la integración europea sin contrapartidas y que dejó a cambio un país de camareros, repartidores y mileuristas precarios. La conclusión de este análisis sintetiza que el hallazgo del estudio es la demostración empírica de que la denominada “reconversión industrial” de España durante los últimos 45 años **constituye, en realidad, un proceso de destrucción estructural con graves consecuencias sociopolíticas y territoriales**.

Los datos analizados revelan una transferencia directa de vulnerabilidad, donde la masiva pérdida de empleo industrial de calidad (cuya participación cayó como hemos visto en la Tabla 1 siendo sustituido por la terciarización). Una terciarización marcada por la precariedad, la baja productividad y la inestabilidad contractual (maquillado por las reformas de todos los gobiernos conformes a los intereses de Bruselas como capital de la UE). Este patrón no solo ha segmentado el mercado laboral, sino que ha erosionado la base material y contributiva del Estado de Bienestar, representando la principal amenaza a la sostenibilidad de las pensiones y la protección social en el largo plazo.

Por todo esto, tenemos argumentos para **desafiar la narrativa ortodoxa de la convergencia económica** y re-enmarcar la desindustrialización como un fracaso político-social (quizás buscado por intereses de determinados agentes económicos y políticos), y no una fatalidad económica. **Este análisis refuerza las teorías de la dependencia y la crítica materialista**, que postulan que la desindustrialización acelerada (particularmente tras la entrada en la CEE) y la traición de la élite al pueblo trabajador español y a su masa obrera (ciertamente hubo unos vende obreros), generó una fragilidad estructural, acentuando la desigualdad territorial y confirmando que la competencia vía bajos salarios se consolidó como el mecanismo de ajuste español, un hallazgo de gran valor para la sociología.

Por lo tanto, dejamos la incógnita para pensar con estas aportaciones si la solución a la fragilidad social española pasa inevitablemente por la recuperación de una base productiva fuerte, soberana y con respeto a la clase trabajadora.

8. Referencias

Bañón i Martínez, R. y Tamboleo García, R. (2015). *Ideas para la Gobernanza*. Madrid: Editorial Fragua.

Banco de España (2025). *Estadísticas*. Disponible en: <https://www.bde.es/wbe/es/estadisticas/>

BBVA Research & Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). (2023). *Series largas de VAB y empleo regional por sectores, 1955–2021 (RegData)*. Disponible en: <https://acortar.link/jUv6qF>

Dataestur. (2024). *Datos turísticos de España 2024: Llegadas internacionales por comunidad autónoma*. Ministerio de Industria y Turismo.

De la Fuente, Á. y Ruiz, P. (2024). *España: Series largas de VAB y empleo regional por sectores, 1955–2022 (RegData SECT v6.3)* [Archivo Excel]. BBVA Research / FEDEA.

Eurostat. (2025). Production in industry - annual data. https://doi.org/10.2908/STS_INPR_A

Global Data Lab del Institute for Management Research (IMR), Universidad Radboud (2025). *Fuentes de Datos*. <https://acortar.link/sZtWUC>

- Hernández Pedreño, M. y Manzanera Román, S. (2026). *Pobreza y desigualdad social*. En R. Tamboleo García (Dir.), *Manual de sociología: la sociedad gaseosa* (pp. 169-188).
- Insituto Nacional de Estadística. (2023). *Estadísticas de la industria: cifra de negocios y valor añadido bruto 1980-2024*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). *Encuesta de Población Activa (EPA): Resultados por comunidades autónomas*.
- IVIE. (2025). *Diferentes bases de datos*. Valencia: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. https://www.ivie.es/es_ES/bases-de-datos/
- Luna Cano, R., García Luque, O. y Hernández Pedreño, M. (2022). *Desigualdad y riesgo social en la Región de Murcia en tiempos de crisis*. En R. Tamboleo García y D. Santos González (Eds.), *Campos de sociología bajo presión* (pp. 309-332).
- Marx, K. (1990). *El capital: Crítica de la economía política* (Ed. revisada de 1867). Madrid: Siglo XXI. (Original publicado en 1867).
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (2022). *Indicadores de desarrollo humano por comunidades autónomas: actualización metodológica y resultados*. Secretaría General de Análisis Económico.
- Ortín, J. (2023). *Cambios en la estructura social*. En R. Tamboleo García (Dir.), *Manual de sociología: la sociedad gaseosa* (pp. 189-218).
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). *Human Development Report 2023/24: Breaking the Gridlock*. United Nations Development Programme.
- Santos González, D. y Tamboleo García, R. (2023). *Reflexiones desde la incertidumbre*. Dykinson. <https://doi.org/10.2307/jj.5076254>
- Tamboleo García, R. y Bañón i Martínez, R. (2021). La asimetría en las relaciones intergubernamentales: el caso del Estado de las autonomías en España. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 81, 211-250. <https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n81.a309>
- Tamboleo García, R. (2023). *Manual de Sociología*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Tamboleo García, R. (2026). *Manual de Sociología: la sociedad gaseosa*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Tamboleo García, R. (2024). Evolución actitudinal ante las políticas de lucha contra la COVID-19 en Europa: Un análisis de Psicología Social. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1417>
- Thompson, E. P. (1963). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Madrid: Siglo XXI.
- Wright, E. O. (1997). *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weber, M. (1978). *Economía y sociedad* (Trans. original de 1922). México: Fondo de Cultura Económica.

Agradecimientos: El presente texto nace en el marco de un proyecto ACCIÓN COST (CA21133) de la COST | European Cooperation in Science and Technology (Funded by the European Union), "Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS)". También es apoyado por el Departamento de Análisis Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Conflicto de intereses: no existe conflicto de intereses.

Declaración responsable del uso de herramientas de IA: se ha utilizado en menos de un 10 % del volumen del trabajo en apoyo de la corrección de estilo y gramatical para mejorar la lectura del trabajo en la que también ha intervenido una herramienta de dictado oral del procesador de textos.

AUTOR:

Rubén Tamboleo García

Universidad Autónoma de Madrid / Universidad Carlos III de Madrid, España.

Profesor de Sociología en UAM y UC3M. Tutor Académico Internacional (TAI) UC3M. Profesor Tutor de Sociología y de Ciencia Política y de la Administración con *Venias Docendi* UNED. Anteriormente Profesor de Sociología UVa y UCM e Investigador Tiempo Completo URJC. Docencia oficial en 20 asignaturas y 10 grados distintos. Director del Manual de Sociología (segunda Edición en 2026 la Sociedad Gaseosa) en Tirant lo Blanch. Investigador Visitante en Universidades de Liverpool y Viena. Investigador Red COST, líder Grupo Trabajo proyecto CA20112, y miembro Comité Gestión CA17132, CA21133 y CA24150. Investigador Innovación Docente y en otros proyectos Horizon como REMINDER. Consultor Senior y Gestor de Proyectos de RRHH, Formación y Asuntos Públicos. Analista para más de 25 medios de comunicación. Ponente en más de 70 Congresos Internacionales. Director de 8 Congresos Internacionales celebrados en Panamá, Toluca de Lerdo, Caracas, Valdepeñas y Madrid.

ruben.tamboleo@uc3m.es

Índice H: 12

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-1631-0815>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58990502900>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=JfZj9XYAAAAJ>

Web of Science ID: <https://acortar.link/sOpy8v>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Ruben-Tamboleo-Garcia>

Academia.edu: <https://ucm.academia.edu/tamboleo>